

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**  
**MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

<b>PROCESO</b>	<b>ORDINARIO</b>
<b>DEMANDANTES</b>	<b>MAIRA MARCELA PATIÑO, NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ y YENNY ASTRID CARTAGENA CARO</b>
<b>DEMANDADOS</b>	<b>INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S. y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA</b>
<b>LLAMADAS EN GARANTÍA</b>	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CTO I MEDELLÍN</b>
<b>RADICADO</b>	<b>05001 31 05 021 2018 00230 01</b>
<b>SEGUNDA INSTANCIA</b>	<b>APELACIÓN</b>
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	<b>- INCIDENCIA SALARIAL BONIFICACIÓN - SOLIDARIDAD Art. 34 CST. - RESPONSABILIDAD LLAMADA EN GARANTÍA</b>
<b>DECISIÓN</b>	<b>CONFIRMA</b>

**SENTENCIA No.025**

Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°005 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, contra la Sentencia del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

**ANTECEDENTES**

Las señoras **MAIRA MARCELA PATIÑO, NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ y YENNY ASTRID CARTAGENA CARO** presentaron demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** y la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, con el fin de que: 1) Se declare que entre ellas y la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** existieron sendos contratos de trabajo vigentes en las siguientes fechas:

No.	Nombre completo	Fecha inicio	Fecha final
a.	MAIRA MARCELA PATIÑO	16/12/2016	22/05/2017
b.	NATHALIA CASTAÑO LOPEZ	10/11/2016	22/05/2017
c.	YENNY ASTRID CARTAGENA CARO	02/11/2016	25/05/2017

2) Se declare que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA** es solidariamente responsable de la de las obligaciones derivadas de las citadas relaciones laborales, en el marco del contrato celebrado entre aquella entidad y la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** 3) Así mismo, peticionaron las actoras declarar que sus vínculos culminaron por el incumplimiento continuo de las condiciones pactadas con el empleador, configurándose el despido indirecto. 3) En consecuencia, reclamaron porque se condene a las demandadas de manera solidaria al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por despido injusto, la indemnización moratoria reglada en el artículo 65 CST y la sanción por la no consignación de las cesantías. 4) Por último, solicitó el extremo demandante la indexación de las sumas resultantes.

El sustento de tales pretensiones tuvo como punto de partida que, cada una de las demandantes fue vinculada para laborar al servicio de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, mediante contrato de trabajo a término fijo, desarrollados estos en las fechas descritas anteriormente, todo en el marco del Contrato No. CN-1610-100 suscrito el 21 de octubre de 2016 entre la mencionada sociedad y la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, mismo que tenía como objeto “*prestación del servicio para la implementación del sistema integrado de la gestión documental en los archivos de la Corporación*”, del cual se firmó acta de inicio el 27 de octubre de 2016, suspendiéndose por el término de 8 días en el mes de mayo de 2017, para posteriormente ampliarse su duración.

Que, en el curso de dicho contrato, su vinculación tenía como objeto “*desempeñar el cargo de auxiliar de archivo*”, y en cumplimiento de este, cada una desarrolló las siguientes funciones: 1) **MAIRA MARCELA PATIÑO** encargada de cargar al sistema la documentación digitalizada. 2) **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ** realizaba el análisis de codificación de inventario de acuerdo a tablas de retención. 3) **YENNY ASTRID CARTAGENA CARO** con funciones de líder, al igual que foliar, organizar BD, cargar cajas, coordinar y supervisar las labores de acuerdo a las especificaciones requeridas, desplazamiento entre sedes para coordinar el personal y capacitarlo en el manejo del sistema para digitalización de documentos.

En ese sentido expusieron que, a partir del mes de febrero de 2017 advirtieron cambios en las condiciones inicialmente pactadas con el empleador, como quiera que desde esta época hubo retrasos en los pagos del salario, se modificó el periodo de pago del salario, al igual que no pudieron acceder a los servicios de la EPS, por mora en el pago de los aportes; el representante de la empresa contratante dejó de asistir a las instalaciones **CORANTIOQUIA**, no se continuó la entrega de dotación, como tampoco recibieron el pago de la bonificación de productividad por cumplimiento de la meta propuesta.

Que basadas en lo anterior, decidieron presentar su renuncia aduciendo la existencia de motivos imputables al empleador, sin que a la fecha hubieren recibido el pago de las prestaciones definitivas, pese a haberlas peticionado, situación conocida por **CORANTIOQUIA**.

En ese contexto se indicó en la demanda que, las labores ejecutadas por las accionantes no son ajenas a las actividades de la Corporación demandada, lo cual se denotaba a partir de la experticia, diligencia, cuidado y control a la ejecución del contrato efectuado por la citada entidad, previendo incluso el incumplimiento de la contratista, razón por la que, incluso, establecieron una cláusula penal dentro del acuerdo comercial. En virtud de ello, alegó que, al ser la beneficiaria de la obra ejecutada, la entidad pública debía velar y garantizar el pago de las prestaciones y demás obligaciones de los trabajadores de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**

Por último, se expresó en la demanda que, para asegurar la ejecución del contrato, se adquirió la póliza No. 21-44-1012331197, expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** (Archivo 02 ED).

### **POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS**

En el momento procesal oportuno, la sociedad **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA** aceptó haber sostenido vínculo comercial con la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, pero negó de manera rotunda cualquier nexo laboral con las demandantes (Archivo 10 ED).

Por su parte, la curadora designada para representar los intereses de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, adujo no constarle los hechos de la demanda, y mostró resistencia a las pretensiones de la demanda. Formuló como excepciones las de: “(...) *PRESCRIPCIÓN; PAGO; COMPENSACIÓN; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y BUENA FE* (...)” (Archivo 18 ED).

Mediante Auto N° 130 del 18 de septiembre de 2020 el *A quo* admitió el llamamiento en garantía propuesto por **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** en contra de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, con amparo en la Póliza No. 21-44-1012331197 (Archivo 22 ED).

Por su parte, la sociedad **SEGUROS DEL ESTADO S.A** dio contestación a la demanda y al llamamiento efectuado, oponiéndose a lo solicitado en ambos escenarios. En ese sentido, frente a la tercería, formuló como excepciones las de: “(...) *FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA REALIZAR LLAMAMIENTO FRENTE A LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NO. 21-44-1012331197; AUSENCIA DE REQUISITOS PARA HACER EXIGIBLE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES; COBERTURA EXCLUSIVA DE LOS RIESGOS PACTADOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATAL; IMPOSIBILIDAD DE AFECTAR LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO POR LAS CONDUCTAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO Y EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990; COMPENSACIÓN; LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD – AGOTAMIENTO DEL VALOR ASEGURADO Y PRESCRIPCIÓN* (...)”.

Luego, frente a la demanda propuso los exceptivos de: “(...) *INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA; BUENA FE; IMPOSIBILIDAD DE EXTENDER EL CARÁCTER SUBJETIVO DE LA MALA FE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES SOLIDARIOS; IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR AL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA- COMO EVENTUAL RESPONSABLE SOLIDARIO AL PAGO DE LAS SANCIONES LABORALES Y SALARIOS Y PRESTACIONES EN CASO DE QUE SE CONDENE A INTEGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS; PRECIPCIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO Y COMPENSACIÓN (...)*” (Archivo 25 ED).

### SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 17 de noviembre de 2021 decidió:

*“(...) 1) Se declara la existencia de un contrato de trabajo por obra o labor entre la demandada INTEGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS y las demandantes*

- MAIRA MARCELA PATIÑO desde el 19-dic-2016 hasta el 22 de mayo de 2017, con un salario de \$689.455 para el año 2016.*
- YENNY ASTRID CARTAGENA desde el 3-NOV-2016 al 25-may-2017, salario de \$689.455.*
- NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ desde el 10-NOV-2016 hasta el 20-MAY-2017, con un salario con un salario mensual de \$737.717, más una bonificación de \$130.000 mensuales.*

*2) Declarar la terminación del contrato de trabajo por renuncia voluntaria de las demandantes.*

*3) Condenar a la demandada INTEGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS a reconocer y pagar a las demandantes las siguientes sumas:*

**MAIRA MARCELA PATIÑO**

*Cesantías \$347.074  
Intereses cesantías \$15.213  
Prima legal \$347.074  
Vacaciones \$155.960*

**YENNY ASTRID CARTAGENA**

*Cesantías \$451.940  
Intereses cesantías \$18.150  
Prima legal \$451.940  
Vacaciones \$203.083*

**NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**

*Cesantías \$494.233  
Intereses cesantías \$19.171  
Prima legal \$494.233  
Vacaciones \$225.562*

4) Condenar a la demandada **INTGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS** a pagar a las demandantes las sanciones de los arts. 65 CST en las siguientes sumas:

- **MAIRA MARCELA PATIÑO**: Desde el 23 de mayo de 2017 a razón de \$24.591 diarios, hasta que se verifique el pago. El retroactivo calculado hasta hoy 17-nov-21 asciende a \$39.713.765.

- **YENNI ASTRID CARTAGENA CARO**: Desde el 26 de mayo de 2017 a razón de \$24.591 diarios, hasta que se verifique el pago. El retroactivo calculado hasta hoy 17-nov-21 asciende a \$39.639.993.

- **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**: Desde el 21 de mayo de 2017 a razón de \$28.924 diarios, hasta que se verifique el pago. El retroactivo calculado hasta hoy 17-nov-21 asciende a \$46.769.946.

5) Condenar a **INTEGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS** a pagar a las demandantes por concepto de sanción moratoria del art. 99, num. 3 Ley 50/90 las siguientes sumas:

- **MAIRA MARCELA PATIÑO**: Del 15-feb-2017 al 22-may-2017: \$2.409.876.

- **YENNI ASTRID CARTAGENA CARO**: Del 15-feb-2017 al 25-may-2017: \$2.483.647.

- **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**: Del 15-feb-2017 al 20-may-2017: \$2.776.694.

6) Se declara la solidaridad de la demandada **CORANTIOQUIA** en todas las condenas emitidas en favor de las demandantes.

7) Absolver a la llamada en garantía **SEGUROS DEL ESTADO** del llamamiento realizado por **INTEGRADORA DE LOGÍSTICA Y SUMINISTROS**. Se declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa para hacer el llamamiento.

(...)

9) **CONDENAR** en costas a las **DEMANDADAS** y en favor de las **DEMANDANTES**. Agencias en derecho: \$5.302.839, asumido en partes iguales entre las demandadas. (...)”

Para arribar a esta decisión, el Juez de primer grado consideró que en el caso de autos la vinculación laboral de las demandantes al servicio de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** estaba acreditada conforme la documental aportada al proceso, puntualmente, los contratos de trabajo de cada una de ellas, de los que pudo extraer los extremos temporales, el salario percibido, el cargo para el cual habían sido vinculadas, y en el caso de la señora **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**, la bonificación adicional que le era cancelada, consideraciones a partir de las cuales, coligió, no había duda de la existencia de los contratos descritos.

Evidenciado lo anterior, frente a la terminación de la relación laboral, recordó que, la parte que la culmina debe informar a la otra los motivos que la llevaron a esta determinación; sin embargo, anotó que las actoras no aportaron prueba de los motivos de renuncia, ni siquiera la carta de renuncia a fin de verificar que sucesos fueron precisados allí como razones de su renuncia.

En cuanto al pago de prestaciones y vacaciones reclamadas en el gestor adujo que, ante la negación indefinida del pago de estos emolumentos, según el artículo 167 CGP, correspondía a la empleadora demostrar el pago de las acreencias en comento, y al no haber cumplido con esta carga, procedía imponerle el pago de aquellas.

En punto de las sanciones moratorias de los artículos 65 CST y 99 de la Ley 50 de 1990, memoró que para su imposición, al tenor de lo señalado en la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral CSJ, debe corroborarse el obrar desprovisto de buena fe por parte del patrono, cuestión constatable en este asunto, en virtud del mismo desinterés de la parte empleadora, quien ni siquiera compareció al proceso, circunstancias que dan lugar a acceder a las mentadas indemnizaciones, aclarando que, la primera opera a partir de la terminación del contrato, mientras que la segunda, se causa durante la vigencia del vínculo.

En relación con la solidaridad solicitada en cabeza de **CORANTIOQUIA** expresó que, de conformidad con el artículo 34 CST, el beneficiario o dueño de la obra es solidario responsable por las prestaciones e indemnizaciones adeudados por el contratista, siempre que las labores desplegadas por el trabajador no sean extrañas al giro ordinario de negocios de la contratante, punto en el que, insistió, la responsabilidad solidaria no solo cubre actividades directas del objeto social, sino también aquellas conexas o complementarias que resultan inseparables de cara a la ejecución de dicho objeto o misión, como lo precisó la Sala de Casación Laboral en Sentencias como la dictada en Rad. 40541 del 20 de marzo de 2013, SL4400-2014 y SL1469-2018.

De ahí que considerara en el caso de las demandantes que, si bien sus funciones no tenían relación con el cumplimiento directo y crucial del objeto social de **CORANTIOQUIA**, si estaban relacionadas con este, ya que, pese a no dedicarse la entidad al manejo de archivo, la manipulación de la información de este si resulta indispensable para labores como la concesión de licencias ambientales, entre otras.

Precisó que al tenor de las pruebas, las demandantes desplegaron labores relacionadas con documentos del archivo de esa entidad, tareas que consistían en digitalizar expedientes, radicarlos, codificar inventarios, realizar inventarios en *Excel*, e incluso prestaban apoyo en contratos vigentes, lo cual significa que efectuaran trabajos no solo con los archivos viejos, sino también con la documental de contratos vigentes, describiendo acciones como radicar información del día para consultas, descargue y guarde de documentos, cuestiones puestas de presente por la testigo traída por **CORANTIOQUIA**, quien conoció la información otorgada en virtud de la supervisión que ejercía sobre esa labor.

Con base en lo expuesto explicó que, las funciones de las demandantes eran imprescindibles para el cumplimiento del objeto social de la entidad, dando lugar a la solidaridad reclamada, extensiva a las indemnizaciones moratorias, tras argüir que esta demandada sabía de los créditos adeudados a las accionantes y, aun así, optaron por no cancelarlos.

Finalmente, en lo atinente a la responsabilidad de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, expresó que el llamamiento formulado ni siquiera debió ser admitido, pues en su criterio, debía existir un interés de parte para hacer tal llamado al proceso, legitimación que no tenía la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, quien hizo el

llamamiento, toda vez que las condenas en contra de este no pueden ser cubiertas por la aseguradora. En ese sentido, anotó que quien debía formular el llamamiento lo era **CORANTIOQUIA**, pero no lo hizo, y en tal caso, permitir que la empleadora proponga aquella solicitud es aceptar que actúe en nombre de la entidad pública, para lo cual no cuenta con poder, ni representación. En consecuencia, absolvió a la sociedad de seguros en comento.

## RECURSOS DE APELACIÓN

La apoderada judicial de **CORANTIOQUIA** apeló la decisión manifestando que dicha entidad es de derecho público creada a través de la Ley 99 de 1993, con personería jurídica y patrimonio propio, encargada, en su jurisdicción, del medio ambiente y los recursos naturales renovables, dentro del marco de regulación legal y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme lo dispone el artículo 31 de la citada disposición.

En ese sentido precisó que, dentro de las funciones de esta demandada, no se encuentra ninguna que tenga relación con el objeto del contrato celebrado con **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, ya que, si bien tiene dentro del giro de sus negocios, la custodia, administración, almacenamiento, clasificación, ordenación, depuración de archivos, organización y gestión documental, entre otros, estos no hacen parte de la misión o actividad económica para la que fue creada, más allá de ayudar en la organización de la entidad.

En la misma senda aseveró que, la actividad para la que fue contratada la sociedad mencionada, acaeció en un momento preciso, ya que, desde su creación, no se contaba con archivo digitalizado o en imagen, momento en el que citó los considerandos sobre la procedencia de la responsabilidad solidaria de la Sentencia de la Sala de Casación Laboral Rad. 30997 del 17 de junio de 2018.

A renglón seguido insistió que, las labores ejecutadas por las demandantes no corresponden a aquellas esenciales de **CORANTIOQUIA**, pues pese a que incluso, dentro de esta administre o gestionen información documental, a la par de contar con centro de gestión de los mismos, no depende de esto para desarrollar su actividad; haciendo énfasis en que, antes de contratar a la citada sociedad, podía ejecutar su objeto social, y en que las mismas demandantes aceptaron el manejo de información antigua con la cual debían tener un manejo especial, agregando que, si fuese verdad que los documentos manejados era lo que llegaba a diario y de manera permanente, las pretensiones de ellas cambiarían a equiparar la situación de las actoras al personal de la entidad, caso en el que sería competente para resolver el proceso la Jurisdicción Contenciosa. Así mismo, añadió que, el fin de la contratación de la empresa mencionada fue evacuar la documentación generada desde 1999, aunque repitió, esto no era un impedimento para desplegar su objeto social.

De otro lado expuso que, en virtud de la solidaridad declarada, se impuso condena por las sanciones moratorias, decisión con la que relacionan a su prohiada con la mala fe del contratante, pese a que, desde la etapa de licitación y con posterioridad a la suscripción del contrato, estuvo pendiente y atenta al cumplimiento del contratista, incluidas las obligaciones respecto de su personal, verificando el pago de salarios y prestaciones, de donde se colige la buena fe del ente público, tanto que puso en conocimiento de la compañía de

seguros la situación ocurrida, dado que dentro de las garantías pactadas con esta, se cubren salarios y prestaciones sociales, por lo que no resulta viable endilgarle el incumplimiento de la empleadora.

Reprochó que el Juez de primer grado incluyera la bonificación entregada a las demandantes como salario, como quiera que la misma se entregaba por el cumplimiento de metas, a lo cual se suma que desde los contratos se establece que las bonificaciones no hacen parte del salario, situación que la llevó a reclamar que no sea tenida como tal.

Por último, apuntó contra la exoneración de responsabilidad de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, pidiendo que, de ser el caso, se mantenga su responsabilidad en razón de la garantía expedida por esta encaminada a amparar el contrato suscrito entre **CORANTIOQUIA** e **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, pues al ser condenada la primera de manera solidaria, es la directa beneficiaria de la Póliza No. 21-44101233194. De igual forma, peticionó la exoneración de las costas procesales, dado que su actuar siempre estuvo ceñido a la buena fe.

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

**DE LAS DEMANDANTES.** Dentro del término otorgado, la mandataria de las **DEMANDANTES** recordó la regulación legal en torno a la solidaridad contenida en los artículos 34 y 35 CST, así como el desarrollo jurisprudencial de esta figura en Sentencias Rad. 10515 de 1985, SL467-2019, T-021-2018, esto con la finalidad de solicitar la confirmación de la sentencia, especialmente la solidaridad concluida en cabeza de **CORANTIOQUIA**, pues insistió en que la documental gestionada por el grupo contratista era parte del giro normal de la evidencia de las gestiones de la entidad contratante.

De otro lado, defendió la procedencia de las indemnizaciones moratorias reconocidas, pues desde el extremo empleador, este nunca veló por garantizar los derechos mínimos de las trabajadoras (Archivo 05 ED Tribunal).

**DE CORANTIOQUIA.** Por su parte, la apoderada de **CORANTIOQUIA** expuso argumentos similares a los esbozados en su alzada, puntualmente en lo que tiene que ver con la solidaridad declarada en sentencia. Lo anterior, a fin de recalcar que dentro su función no se encuentra ninguna relacionada con el objeto del contrato adelantado por **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, ya que, a pesar de tener unos archivos documentales, dicha actividad no es de la misión del ente público, máxime que la actividad para la que fue contratada la sociedad mencionada acaeció en un momento preciso, debido a que, desde su creación, la entidad no contaba con archivo digitalizado o en imagen.

En ese sentido aseguró que, de mantener la decisión de primera instancia, sería tanto como considerar que cualquier función del resorte administrativo tendría cabida en su objeto, erigiéndola como una entidad multipropósito, lo que iría en contravía de la normativa que la regula.

Además adujo que, debe presumirse la buena fe de su representada en todas sus actuaciones, idea que *contrario sensu*, hace inviable atribuirle mala fe, más cuando estuvo atenta al cumplimiento de las obligaciones en favor de los trabajadores contratados por la sociedad en comento, razones que en su criterio, debieron ser tenidas en cuenta por el

Juzgador al momento de imponerle el pago de las indemnizaciones moratorias, punto en el que cuestionó el compute del salario en la decisión apelada, como quiera que, incluyó como factor de liquidación, la bonificación que no tiene connotación salarial (Archivo 04 Tribunal).

**DE LA LLAMADA EN GARANTIA. SEGUROS DEL ESTADO.** Por último, la procuradora judicial de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** se manifestó en contra de la responsabilidad solidaria endilgada a **CORANTIOQUIA** por falta de conexidad entre la actividad desempeñada por las trabajadoras, el objeto social de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, y el objeto social de la citada entidad pública, dado que esta última está direccionada a la administración del medio ambiente y los recursos renovables, mientras que la sociedad en comento tiene como objeto la gestión de archivo documental, no encontrándose reunidos los supuestos del artículo 34 CST, al paso que cita como refuerzo de sus argumentos la Sentencia proferida dentro del Rad. 49730 del 1 de junio de 2016.

De otro lado refirió que, de mantenerse la decisión, la aseguradora no debe asumir o reembolsar recurso alguno en aplicación de la Póliza No. 21-44-101233197, en atención a que **CORANTIOQUIA** acudió al proceso sin formular el respectivo llamamiento, perdiendo con ello la oportunidad en los términos del artículo 64 CGP, aunado a que, quien efectuó el llamamiento fue **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, pero dicha solicitud no cumplió con los requisitos formales, ya que no contaba con legitimación para hacerlo.

Luego precisó que, de considerar la procedencia del amparo en mención, es necesario que aparezca acreditado que las actoras laboraron en la ejecución del contrato No. CN-1610-100, que exista solidaridad entre los contrayentes de este, y que finalmente, el beneficiario de la póliza sea condenado solidariamente, especificando que las pólizas de cumplimiento solo cubren prestaciones sociales e indemnizaciones, rubros en los que no se incluyen auxilio de transporte, vacaciones, aportes parafiscales y sanción moratoria, postura incluso precisada por la Sala Laboral del Tribunal de Medellín (Archivo 06 ED).

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer, primero, si había lugar a tener como factor salarial las bonificaciones recibidas por las demandantes de parte de su empleador, **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, o, por el contrario, cumple disponer la reliquidación de las prestaciones e indemnizaciones reconocidos en primera instancia.

Seguidamente, se analizará si hay responsabilidad solidaria de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA** en relación con las condenas impuestas a la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, circunstancia que, de mantenerse, conllevaría a que la Sala estudie igualmente la responsabilidad de la llamada en garantía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS, la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tiene lo siguiente:

- (i) Que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA** y la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** suscribieron el Contrato No. CN-1610-100 de 2016, cuyo objeto era la “(...) *PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE LA CORPORACIÓN* (...)”, iniciado el 27 de octubre de 2016, y culminado por incumplimiento de la contratista el 30 de mayo de 2017 (f. 2 Archivo 35 ED, f. 26 y 33 a 37 Archivo 04 ED).
- (ii) Que, en ejecución de lo anterior, la sociedad la **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** vinculó laboralmente a las demandantes a través de contratos por obra o labor, desarrollados en los siguientes extremos (f. 2 a 6, 8 a 13 y 19 a 25 Archivo 04 ED):
  - **MAIRA MARCELA PATIÑO** del 19 de diciembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017.
  - **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ** desde el 10 de noviembre de 2016 hasta el 20 de mayo de 2017.
  - **YENNY ASTRID CARTAGENA CARO** del 3 de noviembre de 2016 al 25 de mayo de 2017.
- (iii) Que el cargo para el que fueron vinculadas las demandantes lo fue el de “*auxiliar de archivo, organización, digitación, otros*” (f. 2 a 6, 8 a 13 y 19 a 25 Archivo 04 ED).
- (iv) Que el 28 de febrero de 2018 las señoras **MAIRA MARCELA PATIÑO, NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ** y **YENNY ASTRID CARTAGENA CARO** presentaron derecho de petición en la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, solicitando el pago de las prestaciones e indemnizaciones adeudas por **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, a lo cual no accedió la citada entidad en comunicado del 12 de marzo de 2018 (f. 27 a 37 Archivo 04 ED).

Precisado lo anterior, y ante la falta de discusión en torno a la existencia de una relación de trabajo entre las señoras **MAIRA MARCELA PATIÑO, NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ y YENNY ASTRID CARTAGENA** y la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, esta última como contratista de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, por efectos eminentemente prácticos y metodológicos para abordar la decisión, de acuerdo con lo argüido en cada uno de los puntos materia de apelación, la Sala analizará, en primera medida, la discusión trazada en punto a la inclusión de la bonificación por metas pagadas a las demandantes como salario, y su respectiva incidencia prestacional.

A continuación, se estudiará lo relacionado con la responsabilidad solidaria de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA**, al igual que de la llamada en garantía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y lo relacionado con las costas procesales impuestas a la entidad pública.

### **DE LA BONIFICACIÓN POR METAS**

La conclusión del Juez de primer grado en relación con la asignación salarial base para liquidar las prestaciones de las demandantes fue en el sentido que, en el caso de las señoras **MAIRA MARCELA PATIÑO y YENNY ASTRID CARTAGENA**, se tendría en cuenta la suma equivalente al salario mínimo legal, mientras que, en el caso de **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**, tomaría en consideración adicionalmente, la suma de \$130.000 que la empleadora **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** certificó haber cancelado con periodicidad a la citada accionante, monto que reconoció, forma parte del salario a utilizar para el computo de las prestaciones adeudadas.

A esta conclusión se opuso la **CORPORACIÓN** recurrente quien al respecto manifestó que, además de ser cancelada aquella bonificación por el cumplimiento de metas, desde el contrato se estableció que no haría parte del salario de la trabajadora,

Bajo ese horizonte, el primero de los puntos a estudiar está centrado en verificar la connotación salarial discutida por la recurrente, que le fuera atribuida a la “*bonificación, producción, varias*” pagada mensualmente a la señora **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ**, por valor de \$130.000, según la consideración del Juez de instancia.

Así entonces, entendido el salario como aquella retribución patrimonial del trabajador por prestar su fuerza de trabajo, el artículo 127 del CST establece que, tiene la condición de salario, y hace parte de este, todo aquello que percibe el empleado en especie o dinero como contraprestación directa del servicio.

En contraposición con ello, el artículo 128 del C.S.T. establece que no toda erogación, en especie o en dinero, percibida por el trabajador se considera como factor salarial, siempre y cuando dichos emolumentos sean: (i) ocasionales, por mera liberalidad y de aquellas que la norma señaló expresamente como posibles de ser excluidas de factor salarial; (ii) de los que recibiese en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones; (iii) las prestaciones sociales, el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, y, (iv) **los beneficios habituales u ocasionales acordados con el empleador de forma expresa.**

A su turno, recientemente la Jurisprudencia Especializada aclaró que los postulados contenidos en el artículo 128 CST en el ámbito de aquellos pagos no constitutivos de salario, se erigen como una excepción a la generalidad acerca de que cualquier pago recibido por el trabajador constituye factor salarial. Bajo ese panorama, debe quedar sumamente claro y detallado qué beneficios o auxilios extralegales no tienen incidencia salarial, siendo ineficaces todas aquellas cláusulas genéricas o globales, o aquellas estipulaciones que para su aplicación se requiera acudir a otro tipo de interpretaciones más allá del contenido literal de lo pactado. Así lo expuso en Sentencia SL1798-2018 del 16 de mayo de 2018.

También ha insistido la Jurisprudencia en que los pactos suscritos entre trabajadores y patronos tendientes a restar incidencia salarial a determinados conceptos no son inquebrantables, **pues de conformidad con la legislación, estos no están autorizados para disponer que no es salario un emolumento que, en esencia, conforme los parámetros de la norma sustantiva, si lo es** (Léase la Sentencia SL5159-2018 del 14 de noviembre de 2018).

Vistos los criterios reglados por el precedente para delimitar el salario, en síntesis, el carácter salarial de un pago lo define el hecho de que **dicha erogación tenga como causa el servicio prestado por el trabajador, supuesto en el cual, incluso en contra de lo acordado por las partes, deberá tenerse como factor integrante del salario.**

Así, lo primero que debe anotar la Corporación es que, a folio 13 Archivo 04 ED reposa precisamente certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la empresa **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, en la cual dejó constancia en cuanto a que: “(...) *La trabajadora NATHALIA CASTAÑO (...), laboró desde el 10 de noviembre de 2016 hasta el 20 de mayo de 2017 desempeñando el cargo de líder de codificación, digitalización e indexación de archivo y gestión documental, devengado un salario de \$737.717 (...), más bonificaciones, producción, varias por la suma mensual de \$130.000 (...)*”, documento que no fue objeto de tacha o desconocimiento por la contraparte.

En ese sentido, importa recordar sobre el valor probatorio de esta clase de certificaciones, en inveterada Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha decantado que es deber del funcionario judicial tener como un hecho cierto el contenido inserto en esta clase de documentos, como quiera que al provenir de quien es anunciado como empleador, no es usual encontrar que éste falte a la verdad y emita documentos sobre aspectos relevantes en el ámbito jurídico, que le pueden llevar a comprometer su responsabilidad patrimonial. Así se ha sostenido de manera pacífica, por ejemplo, en Sentencia SL4652-2020 del 01 de diciembre de 2020, donde se rememoró lo dicho en Sentencia del 30 de abril de 2013 proferida dentro del Rad. 38666 que señaló:

**“(...) El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas.** Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la

*relación laboral. (...)*". (Subraya y Negrilla de la Sala)

De ahí que, teniendo como punto de partida lo certificado por la empresa, para la Sala fue un acierto del Juzgador de primer grado reconocer la incidencia salarial del beneficio descrito, pues además de constatarse de la prueba evocada la habitualidad de su pago (mensual), también emerge que dicha suma era pagada - concepción que incluso tiene la recurrente - por el cumplimiento de metas de producción, condición que constituye ni más, ni menos, que una remuneración a la actividad personal de la trabajadora para la demandada, como se prohíja desde el escrito inicial, reuniéndose con ello los presupuestos de que habla el artículo 127 CST para que sea considerada de naturaleza salarial.

Frente a ello es menester dejar claro que, más allá de que en la cláusula **QUINTA** del contrato de trabajo se hubiere establecido que, entre otros, los pagos por producción no tenían incidencia salarial (f. 8 a 12 Archivo 04 ED), dicho acuerdo genérico no tiene eficacia, en tanto la Jurisprudencia, como se dejó anotado atrás, se ha esforzado por recabar en que no pueden los sujetos del contrato de trabajo, negarle entidad salarial a un pago que indefectiblemente lo tiene, pues el núcleo protector del derecho del trabajo hace que en esta materia no sea predicable la plena y absoluta vigencia de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, al existir un catálogo mínimo de derechos y garantías a favor del trabajador.

Por lo expuesto, al no salir adelante los argumentos de la promotora del recurso en este aspecto, habrá de mantenerse la decisión asumida en sede de primera instancia.

### **DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**

Expuso la apelante pasiva que la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA** no debió ser condenada como responsable solidaria de las condenas impuestas a la sociedad empleadora, arguyendo que, dentro de las funciones asignadas legalmente a esta entidad, ninguna tiene relación con la materia contratada con **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, pues pese a tener a su cargo la custodia, administración, almacenamiento, clasificación, ordenación, depuración de archivos, organización y gestión documental, esto realmente no constituye su actividad comercial o misión para la que fue creada, aunado a que las actividades desplegadas por las accionantes se restringieron a un momento puntual, para actualizar el archivo de la Corporación, reiterando que esta no dependía de aquellas funciones no esenciales para ejecutar su objeto social, más cuando lo manejado por las trabajadoras era información antigua.

Con la finalidad de resolver este punto hay que reseñar lo expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL14692-2017, SL4400-2014, del 26 de mar. 2014, rad. 39000, y 20 de mar. 2013, rad.40.541, en las que se expuso que, para configurar la solidaridad descrita en el artículo 34 CST, la actividad ejecutada por el contratista independiente debe cubrir una necesidad propia del beneficiario, o debe corresponder a una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social. Así mismo, el Alto Tribunal indicó en las providencias mencionadas que para la determinación de la solidaridad se debe tener en cuenta no sólo el objeto social del contratista y beneficiario, sino también las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador.

Sobre el punto subrayado, en Sentencia SL1017-2019 del 12 de febrero de 2019 el Órgano de Cierre en lo laboral, rememoró su postura frente la solidaridad estudiada en Sentencia SL217-2018 en la que reseñó:

*“(…) Esta Sala en sentencia SL4400-2014, del 26 de mar. 2014, rad. 39000, rememoró lo enseñado en decisión SL, del 20 de mar. 2013, rad.40.541, en torno a que la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, que por lo mismo desarrolla éste.*

*Igualmente se exhibe importante recordar que para su determinación puede tenerse en cuenta no sólo el objeto social del contratista y del beneficiario de la obra, sino también las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador.*

*Así se explicó en la sentencia SL, del 2 de jun. 2009, rad. 33082:*

*[...]*

*Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que, de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que sí, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado. (…)*. (Subraya de la Sala).

Sentados los parámetros legales y jurisprudenciales de la solidaridad predicada, en lo concerniente a **CORANTIOQUIA**, desde su creación, el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 consagró que el objeto de Corporaciones Autónomas Regionales como la demandada gravitaría en: *“(…) la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente (...)”*, para seguidamente, asignarle las funciones contempladas en el artículo 31 *ibídem*, relativas a la ejecución de políticas, planes, programas en materia medio ambiental, conforme las políticas trazadas desde el Ministerio del Medio Ambiente, así como la promoción, desarrollo, vigilancia, seguimiento y control de actuaciones que impliquen la utilización de recursos naturales.

En contraste con ello, **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, concibe dentro de su objeto social, entre otras cosas: *“(…) 1) ORGANIZACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS. 2) CUSTODIA, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DEPURACIÓN DE ARCHIVOS, ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DOCUMENTAL. 3) INFORMACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS, TECNOLÓGICOS, REPRODUCCIÓN Y COPIA DE INFORMACIÓN. 4) SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, REPOGRAFÍA, HELIOGRÁFICAS, DIGITALIZACIÓN, MICROFILMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO Y ELECTRÓNICO DE TODO TIPO DE INFORMACIÓN (...)”*. (f. 44 a 50 Archivo 04 ED).

Luego, el contrato No. CN-1610-100 de 2016, fue suscrito entre las citadas para la “(...) *PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE LA CORPORACIÓN (...)*” (f. 2 Archivo 35 ED).

Justamente, fue en ejecución de dicho contrato que la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** contrató a las señoras **MAIRA MARCELA PATIÑO, NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ** y **YENNY ASTRID CARTAGENA CARO**, para desempeñar el cargo de “*auxiliar de archivo, organización, digitación, otros*” (f. 2 a 6, 8 a 13 y 19 a 25 Archivo 04 ED).

Ahora, respecto de las características fácticas como se desarrolló el servicio de las demandantes, se cuenta con las declaraciones de **DANIELA SÁNCHEZ VELEZ** (Min. 1:20 a 13:55 Archivo 38 ED) y **ANGIE CRISTINA UPEGUI TREJOS** (Min. 1:00 a 15:42 Archivo 39 ED), ambas en su momento, compañeras de trabajo de las actoras, al servicio de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** en la ejecución del contrato sostenido con **CORANTIOQUIA**. En efecto, ambas testimoniales refirieron que las funciones asignadas a las demandantes concernían a la organización del archivo de la citada Corporación Autónoma Regional, que a su vez comprendía labores de foliación, digitalización, codificación y clasificación de tablas de retención, y organización de documentos en general, labores en las que, si bien eran supervisadas por personal de la contratista, dicho funcionario recibía directrices del personal de **CORANTIOQUIA**.

Indicaron las testimoniales que, todas las trabajadoras contratadas para esta labor, incluidas las demandantes, estaban encaminadas a organizar el archivo de la entidad, compuesto precisamente por contratos y documentos relacionados con el tema ambiental, función en la que, por ejemplo, la demandante **NATHALIA CASTAÑO LÓPEZ** tenía una tarea adicional o específica, a saber, la codificación de las tablas de retención documental, mientras que las otras se encargaban del proceso de indexación, foliación, digitalización y organización documental, aclarando que todo el archivo pertenecía a la autoridad ambiental señalada.

Luego, a instancias de la Corporación fueron escuchadas las señoras **LUZ MABIL ZAPATA RIVERA** (Min. 00:55 a 40:00 Archivo 40 ED) y **BLANCA ESTELA OSPINA MARÍN** (Min. 00:52 a 33:30 Archivo 41 ED). La primera, vinculada a **CORANTIOQUIA** hace 26 años, explicó que el contrato suscrito con la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** fue celebrado con el fin de actualizar la información corporativa en las bases de datos de la entidad, debido al represamiento documental existente para esa época.

En ese contexto explicó que, la información en comentario está relacionada con los diferentes trámites ambientales, contractuales y de gestión administrativa adelantados por la entidad, que tenía desactualizadas sus bases de datos. Aceptó que para ello fueron vinculadas las accionantes, quienes se encargaban de revisar los expedientes físicos, verificar las bases de datos e ingresar al módulo de gestión documental los datos existentes en físico, a fin de tenerlos de manera virtual, aparte de otras funciones como, quitar ganchos, dobles, digitalizar y adjuntar imágenes para que estas quedasen en las bases de datos.

Así mismo, expresó como justificación para la vinculación de aquellas, el hecho de no contar la CAR con recurso humano para atender esta función, que, insistió, en ese momento tenía un volumen muy alto, aclarando que, normalmente esa actividad era adelantada por personal de la entidad.

Luego, al ser inquirida sobre la relevancia de las funciones desplegadas por las trabajadoras, de cara al objeto social de **CORANTIOQUIA**, la testigo indicó que las actividades de archivo hacen parte de este objeto, toda vez que dentro del actuar de la entidad se adelantan trámites ambientales y administrativos, expedientes ambientales relacionados con permisos a los externos (ambientales o de concesión de aguas, por ejemplo), punto del cual dedujo la propia declarante que, las funciones de las actoras tenían que ver con la actividad económica de dicho ente. De hecho, indicó que, la entidad cuenta con un centro de administración de documentos del que precisamente funge como coordinadora. Que, si bien la Corporación no ofrece servicios de digitalización de expedientes, si requiere hacerlo internamente para tener organizada y dispuesta la información manejada, ya que llegaron a tener retrasos en este ámbito desde el año 1995. Por último, indicó que los cargos del personal perteneciente al archivo salieron en su momento a convocatoria pública.

Por su parte, la testigo **OSPINA MARÍN**, en la actualidad funge como asistente administrativa de la Oficina Territorial Aburrá Sur de **CORANTIOQUIA**. Al igual que la anterior deponente, aseveró que en ejecución del contrato de digitalización de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, las demandantes tenían varias funciones, y dentro de lo encargado registraban expedientes y los digitalizaban, mientras que otras, codificaban inventarios, los realizaban en *Excel*, prestaban apoyo en los contratos vigentes, radicaban información del día a día, acto en el que procedían a digitalizarla, prestaban expedientes para consulta, los descargaban y guardaban, sucesos que dijo constarle porque era la supervisora suplente del contrato, teniendo a cargo la revisión de los informes presentados por la contratista. Afirmó que la contratación de esta sociedad se requirió porque había mucha información de los primeros años de la entidad que no se digitalizó, y que a su vez era de mucha consulta.

Más adelante, como lo señaló la testigo que le precedió, dijo que al interior de la entidad se tramitan licencias ambientales, y en ese caso, las labores de las demandantes, en efecto, tienen que ver con el objeto de la Corporación, pues está tiene a su cargo la función de administrar la información que recepciona, lo que implica agregarla a la base de datos, digitalizarla y subirla a los aplicativos corporativos, tarea que realizaban precisamente las demandantes, aunque anotó, las actividades efectuadas desde el Centro de Gestión Documental pese a no ser misionales, sí son de mucho apoyo.

En ese contexto detalló que, al momento de contratar los servicios de la contratista, ocurría que a la Corporación no había llegado el uso de los programas que incluían la digitalización, viéndose en la necesidad de hacer esto con los expedientes antiguos, situación que a la fecha se tiene superada, ya que todo se digitaliza y envía al expediente virtual. Finalizó su intervención manifestando que, dicha función quedó a cargo del archivo central.

En efecto, los testigos se ofrecen contestes y responsivos sobre cada uno de los interrogantes formulados, brindando una exposición de lo que cada uno pudo captar desde su posición respecto de los sucesos por los cuales fueron consultados. En ese sentir, si bien las primeras declarantes narraron las funciones específicas realizadas por las trabajadoras al interior de **CORANTIOQUIA**, merecen especial atención los relatos de **LUZ MABIL ZAPATA RIVERA** y **BLANCA ESTELA OSPINA MARÍN**, las cuales, como servidores de la Corporación, además de reiterar las funciones agotadas por las accionantes, fueron contundentes a la hora de detallar la **relevancia** de esa actividad de cara al cumplimiento de objeto social de la accionada, ello por cuanto, partiendo del hecho de las múltiples gestiones y trámites que en lo ambiental se cumplen por esta entidad, es ineludible la manipulación de numerosa información documental relevante, como son *verbigracia* los **contratos administrativos y licencias ambientales**, situación que exige una administración organizada de tales documentales, incorporándola a los aplicativos corporativos, sin importar su antigüedad, dado que, como lo expusieron las deponentes, incluso la más antigua era requerida a menudo para consulta.

En ese sentido, para la Sala, el *A quo* no incurrió en el error intelectual que le endilga la recurrente, pues su análisis estuvo ceñido no a que los objetos sociales de contratante y contratista fuesen idénticos, como tampoco a que las funciones desplegadas por una, estén insertas en el pliego de actividades de la otra, sino que apuntó al criterio de **conexidad y complementariedad**, abiertamente aceptado por la Jurisprudencia Especializada Laboral, citándose a manera de ejemplo, lo considerado en la Sentencia SL4773-2021 en la que se dijo:

*“(...) En efecto, aunque esta Corporación también ha indicado que para que surja la responsabilidad solidaria del beneficiario no es suficiente con que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, sino que aquella constituya «[...] una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social [...]», como lo acotó la Sala en la sentencia CSJ SL14692-2017 o que , en otras palabras, «[...] la labor constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico», como se dijo, en la CSJ SL4400-2014, ello no implica que las actividades normales de las empresas comparadas o de la dueña de la obra y la actividad prestada por el contratista y el trabajador deban ser iguales, o estar insertas en el objeto social de la primera, pues conforme lo ha decantado la jurisprudencia, para que opere la garantía en comento, se requiere únicamente que exista relación, conexidad o complementariedad entre las actividades propias y ordinarias del empresario beneficiario del servicio o dueño de la obra y las ejecutadas por el contratista y sus trabajadores. (...)”* (Subrayas y Negrilla de la Sala).

En concordancia con lo antedicho, nótese desde el objeto del contrato suscrito entre personas jurídicas, el direccionamiento de este buscaba la implementación del sistema de gestión documental de la entidad contratante, cuestión que para el ente público revestía gran importancia, pues como lo informaron las testigos, optimizaba los procesos al interior de la entidad en procura de cumplir con su actividad principal, relacionada puntualmente con la gestión medioambiental del territorio en el cual tiene jurisdicción, necesidad surgida precisamente para **CORANTIOQUIA**, pues primero, según quedó visto, contaba con un atraso organizacional desde sus inicios, y segundo, requería actualizarse en razón del avance de las nuevas tecnologías, lo cual significaba que sus

bases de datos debían estar entrelazadas con aplicativos corporativos para facilitar el acceso a la información bajo su custodia.

En armonía con lo anterior, conviene incluso traer a colación que, para la citada accionada, el tema documental no es tomado simplemente como un simple apoyo consistente en el acopio de documentos digitalizados, sino que lo rotula como **fundamental** para sus intereses en perspectiva de lo estratégico, diciendo que:

*“(…) El Programa de Gestión de Documental, es fundamental para la entidad porque se convierte en la guía estratégica que brinda lineamientos a seguir para la implementación de un sistema integral de administración de documentos, salvaguardando así la memoria institucional y su preservación a través del tiempo.*

*La formulación e implementación del Programa de Gestión Documental, evidencia la transparencia en cada uno de sus procesos, trámites y gestiones de Corantioquia, por tanto, los usuarios podrán tener una visión general y clara de los documentos que tramita la entidad, además, de tener acceso y respuesta en forma oportuna de la información que se solicite. (…)*”  
(Programa de Gestión Documental 2021-2023)<sup>1</sup>.

Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones trazadas desde la Ley 594 del 2000 (Ley General del Archivo) Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso de la Información), y Decretos 2609 de 2012 y 1080 de 2015, regulatorios de la obligatoriedad de implementar un programa de gestión documental.

De lo expuesto se resalta que, la contratación de **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** no buscaba simplemente cubrir una necesidad propia de **CORANTIOQUIA**, sino que también se encaminaba al mejoramiento y actualización como entidad, de cara a las herramientas informáticas, lo cual de paso, era requerido para dar cumplimiento a un propósito de orden legal en cuanto al manejo de su información, erigiéndose entonces la labor desplegada por las accionantes, como complementaria de su misión institucional, pues tocaba la forma en la que se ejecutarían los distintos trámites a su cargo, haciendo innegable la conexidad con el cumplimiento de su objeto social, desde ese punto de vista. Por consiguiente, cumple confirmarse la responsabilidad solidaria declarada en la Sentencia apelada en cabeza de **CORANTIOQUIA**.

Ahora bien, dicha condición, es decir, la de responsable solidaria, debe recordarse, es asignada por la ley a aquellas personas, sea naturales o jurídicas, **de orden privado o público, que acuden a terceros independientes para el desarrollo de actividades normales de su negocio o empresa o conexas a ellas**, razones por las que se entiende que, conforme lo dispuesto en el artículo 34 CST, se configuran las razones jurídicas para que **CORANTIOQUIA**, tenga a su cargo igualmente el deber de responder, además de los salarios y prestaciones sociales, por las indemnizaciones que se generen a favor del trabajador, dentro de las que claramente se encuentra la dispuesta en los artículos 65 CST y 99 de la Ley 50 de 1990, tal como lo señaló la Sala de Casación Laboral de la CSJ en Sentencia SL497-2022, en la que se recordó lo dicho en Sentencia SL12234-2014:

*“(…) conviene memorar que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo refiere que son contratistas independientes y, en tal sentido, verdaderos empleadores, quienes ejecuten*

---

<sup>1</sup> Tomado de [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co)

*una o varias obras o cualquier servicio en favor de un tercero, por un precio determinado, con la asunción de todos los riesgos y la utilización de sus propios medios, con libertad y autonomía técnica y directiva en la realización del objeto contratado (...).*

**En dicho precepto se impone la solidaridad al beneficiario o dueño de la obra, respecto del valor de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales,** cuando lo contratado obedezca a actividades normales de su empresa o negocio, sin perjuicio de que “estipule con el contratista las garantías del caso o para que se repita contra él lo pagado. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de los subcontratistas (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala)

Basta entonces lo anterior para desechar lo argüido por la apelante cuando reprochó la extensión de la condena a su representada por concepto de las citadas indemnizaciones, puesto que, se itera, dicha imposición no está cimentada en la consideración de existencia de mala fe por parte de **CORANTIOQUIA**, como erradamente lo entiende la recurrente, sino en la responsabilidad solidaria estudiada, por efectos de lo condensado en el artículo 34 CST, pues, recuérdese, **la procedencia de las sanciones moratorias parte del análisis de la actitud del empleador, no de los obligados solidarios con este**, quienes tienen la acción para repetir por las acreencias a cuyo pago se ven compelidos, contra el empleador, como directo responsable.

### **DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

En cuanto a la responsabilidad de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** como llamada en garantía, el Juez primigenio indicó que no había lugar a estudiar si procedía imponerle la asunción de obligaciones económicas, en la medida en que, al haber sido llamada por **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, esta no tenía legitimación para hacerlo, y al no haberse formulado la petición de tercería por parte de **CORANTIOQUIA**, quien era la realmente beneficiaria de la póliza de seguro expedida por dicha entidad, tampoco era viable acceder a su procedencia. Empero, la Corporación apelante insiste en que se fulmine condena en contra de la aseguradora, invocando el contenido de la Póliza de Seguro No. 21-44-101233197.

Pues bien, vale recordar que, frente a la figura del llamamiento, el artículo 64 del CGP establece que: “(...) *Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)*”. Luego, el artículo 66 *ibídem*, presupone que lo atinente al llamamiento es resuelto en la Sentencia, momento en el que se define sobre la relación sustancial, y, si es el caso, sobre las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar.

Al respecto, el Alto Tribunal en Sentencia SL5031-2019 ha señalado sobre esta figura que:

*“(…) La homóloga Civil, por ejemplo, al explicar con profusión la figura del llamamiento en garantía, señaló que, para la doctrina, tal mecanismo es «...una especie de intervención coactiva a instancia de parte que “se funda en el vínculo de garantía que une al tercero garantizador llamado en causa, con el garantizado, llamador en causa. Este vínculo implica la obligación de aquel de venir a prestar a este su defensa en juicio, y eventualmente a resarcir el daño. Aquí la intervención coactiva a instancia de parte se aplica únicamente en cuanto a la garantía”. De allí que, con miras a precisar que en este fenómeno podían haber todas aquellas situaciones en que existe una relación de garantía, proveniente de ley o de convención, que habilite al llamante a convocar a un tercero que le proteja y pague por él o le reembolse lo que erogó por razón de la condena, se incluyeron en el Código de Procedimiento Civil dos normas –artículos 54 y 57- para abarcar un mismo fenómeno, que hoy en el Código General del Proceso, atendiendo a lo dicho, quedó en un solo precepto, en el que, además, figura la posibilidad de que un demandado llame en garantía a otro demandado, figura denominada demanda de coparte (art. 64) (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).*

A partir de lo rememorado, emerge que el llamamiento en garantía no escapa al cumplimiento de presupuestos como la legitimación en la causa (activa o pasiva), en procura de lograr los efectos de su invocación, siendo entonces primordial que, quien actúe como llamante, sea efectivamente quien, por disposición contractual o legal, tenga el derecho de reclamar de la llamada el reembolso o la restitución de lo cancelado por orden judicial.

No obstante, como bien lo anotó el primer Juzgador, en el particular no están dados los requisitos para emitir condena en contra de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, por la potísima razón de que, la sociedad **INTEGRADORA LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S.**, llamante de la entidad de seguros, no es la beneficiaria de la Póliza No. 21-44-101233197, en la medida en que, aquella posición es ostentada por **CORANTIOQUIA** (f. 23 a 25 Archivo 25 ED), la cual, conforme se revisa de las actuaciones surtidas en el proceso, no formuló el llamamiento en la oportunidad correspondiente, sin que sea dable imprimir el estudio a su reclamo de condena, propuesto en contra de la aseguradora, toda vez que este solo surgió al momento de plantear la alzada, cuando la etapa procesal pertinente para hacerlo era al momento de descender el traslado de la demanda (Art. 64 CGP). Con base en lo expuesto, habrá de mantenerse la absolución de la entidad llamada en garantía por falta de legitimación en la causa.

Por último, en lo atinente a la condena en costas fulminada en contra de **CORANTIOQUIA**, es menester indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 CGP, este concepto tiene naturaleza netamente procesal, y su imposición está atada a las results del proceso, puesto que en este momento se define cual extremo de la Litis es acreedor o deudor de las mismas, sin necesidad de analizar situaciones de buena o mala fe de los Litigantes, como erradamente lo entiende la apelante.

Con todo, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia. Las costas de segunda instancia estarán a cargo de **CORANTIOQUIA**, dado que su recurso fue resuelto de manera desfavorable, a lo que se incluye como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE**

**MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,


**RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia del 17 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo de **CORANTIOQUIA**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a UN (1) SMLMV a cargo de cada uno de ellos.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
**MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**